REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, tres (03) de junio del dos mil quince (2015)

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE	ROSALBA DE JESÚS QUIROZ DE BUITRAGO
DEMANDADO	LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y OTROS
RADICADO	05 001 33 33 024 2013 00014 00
Asunto	NIEGA NULIDAD
Auto Interlocutorio	Nº 426

Procede el Juzgado a estudiar la solicitud de NULIDAD propuesta por la apoderada de la parte **DEMANDADA**, la señora **MARÍA ESPERANZA BEDOYA MURILLO**, al considerar la mandataria judicial que en el presente asunto, es nulo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda, por existir "*Falta de Competencia e Indebida Notificación al Demandado*".

I. ANTECEDENTES

1. Encontrándose el proceso para ingresar a despacho, la representante judicial de la señora MARÍA ESPERANZA BEDOYA MURILLO, presentó escrito en la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Administrativos el día 23 de abril del 2015 y recibido por la Secretaria del despacho el 24 del mismo mes y año, obrante de folios 1 a 5 del cuaderno respectivo, en el cual propuso incidente de nulidad, alegando que en el presente asunto, no existe competencia en cabeza de esta agencia judicial en razón del factor cuantía, pues según se desprende del libelo genitor, el apoderado de la parte demandada estimo la cuantía en una suma menor a \$114.356.672, superándose ostensiblemente el límite impuesto en el numeral segundo del artículo 155 del CPACA que a su tenor literal preceptúa que "*Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asunto. 2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*"

2. Agrega que además de la anterior causal, existe la indebida notificación del auto admisorio a la demandada (MARÍA ESPERANZA BEDOYA MURILLO), pues la notificación personal efectuada a la Calle 16 Nº 75-20, fue realizada de mala fe, en virtud de que la parte demandante, tenía pleno conocimiento de la dirección correcta de la particular demandada, toda vez que en el trámite administrativo de la Secretaria de Educación,

tenían acceso a esa información, por ser esta una notificación personal dirigida al señor JESÚS ÁNGEL BUITRAGO MUÑOZ, a la Dirección Calle 20 N° 75-20, lugar donde residían la demandada y el causante; todo ello para que ésta no hiciera parte en el proceso de la referencia, vulnerándose así el debido proceso y el derecho a la defensa.

3. Reitera que como ya lo había indicado en memorial anterior, existe un proceso por las mismas partes, por las mismas causas, en el Tribunal Administrativo de Antioquia- Sala Primera de Oralidad, bajo el radicado numero 05001 23 33 000 2013 01752 00.

4. Del escrito de nulidad se corrió el respectivo traslado por el término de 3 días, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 134 del CGP aplicable al presente asunto, por disposición expresa del artículo 208 CPACA, en el que el apoderado de la demandante recorrió el traslado, señalando que:

- Respecto al señalamiento de la competencia, considera que ésta no es causal de nulidad, como quiera que previo a la admisión de la demanda, se tuvo la oportunidad de evaluar la cuantía para determinar la competencia, procediéndose con la admisión de la demanda por parte del despacho, concluyéndose que sobre este hecho se realizó control de legalidad encontrándose ajustada a derecho, razón por la cual actualmente el proceso se encuentra en los juzgados administrativos.
- Sobre la indebida notificación, estima que no tiene fuerza de verdad legal los argumentos esgrimidos por la parte opositora, toda vez que la dirección para notificaciones aportada en el escrito inicial, fue la que otorgó la demandante a su representante judicial, sin que pueda predicarse la existencia de mala fe, y eso se corrobora en el hecho de haberla vinculado a la causa desde el inicio de la demanda para que participase activamente en el escenario procesal e hiciese valer sus derechos, y en razón a que no fue posible su localización se le nombró curador Ad Litem, quien contestó la demanda de forma idónea y oportuna, lo que indica que la codemandada BEDOYA MURILLO estuvo debidamente representada en la causa que se debate en juicio.
- Por último, anota el hecho de que mientras en el presente medio de control se realizó un esfuerzo por vincular desde la presentación de la demanda a la señora MARÍA ESPERANZA para integrar en debida forma la Litis, en el proceso que se conoce en el Tribunal Administrativo de Antioquia, se omitió la presencia procesal de la demandante, pues ésta es llamada a la Litis de manera oficiosa por el Magistrado que conoce del asunto, pero no por la defensa de quien dijo ser la compañera permanente del causante.

- Derivado de lo expuesto, presenta oposición a la pretensión de declaratoria de la nulidad de todo lo actuado y, en consecuencia, solicita que se continúe con el rito procesal corriente.

5. Del mismo modo, se tiene que la solicitud incoada es de aquellas cuestiones que se deben tramitar como un incidente según lo dispone el artículo 209 del CPACA, por lo tanto, se procede con la resolución de la postulación manifestada por la parte demandante, sin la necesidad de decretar prueba alguna por no considerarse necesario, además de tratarse de una cuestión de pleno derecho que se puede resolver con las pruebas arrimadas por la petente.

Así las cosas, este Despacho establecerá la procedencia de tal solicitud no sin antes realizar las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Según como lo indica la Constitución de Colombia en los dos primeros incisos del artículo 29 en el cual establece el principio de legalidad del proceso al disponer que *“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”* y agrega en el segundo que *“nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”*.

Para garantizar el cumplimiento de la norma que consagra el derecho fundamental al debido proceso, en los diversos ordenamientos procesales se tipifican como causales de nulidad de las actuaciones judiciales las circunstancias que en consideración del legislador se erigen en vicios tales que impiden que exista aquel.

2. Las nulidades procesales no responden a un concepto netamente formalista, sino que revestidas como están de un carácter preponderantemente preventivo para evitar trámites inocuos, son gobernadas por principios básicos, como el de especificidad o taxatividad, trascendencia, protección y convalidación.

Dada la importancia del tema, ha sido constante el sistema procesal civil colombiano en no dejar al intérprete el determinar cuándo se da la violación del debido proceso, sino enunciar con características taxativas las irregularidades que pueden generar la nulidad del mismo por violación de aquél.

3. La consagración del principio de que se trata, fluye nítidamente de disposiciones como el artículo 133 del C.G.P, aplicables al caso en

concreto, por expresa remisión del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en su artículo 208, remite a las disposiciones del Código General del Proceso cuando se trata de nulidad. Así, en lo relacionado con las causales de nulidad del proceso, el referido estatuto procesal, establece:

"Art. 133. Causales de nulidad. *El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:*

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.

2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.

5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o recorrer su traslado.

7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

PARÁGRAFO. *Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece."*

4. De acuerdo con lo anterior, reitera el despacho, las causales de nulidad son taxativas, al reglamentar la materia de las nulidades procesales, el Código General del Proceso consagró el principio de la especificidad, según el cual no hay defecto capaz de estructurar nulidad de la naturaleza comentada sin ley que la establezca expresamente, lo cual se traduce en que el juez no puede recurrir a la analogía para establecer vicios de nulidad, sin extender ésta a defectos diferentes.

Por ello en sentencia de 26 de agosto de 1996, la Corte expuso que: “... *Nuestro Código de Procedimiento Civil... establece que ninguna actuación del proceso puede ser declarada nula si la causal no está expresamente provista en la ley. Las causales de nulidad, pues son limitativas y no es admisible extenderlas a informalidades o irregularidades diversas. Es posible que en el juicio se presenten situaciones que originen desviaciones más o menos importantes de normas que regulen las formas procesales, pero ello no implica que constituyan motivo de nulidad, la cual, se repite, únicamente puede emanar de las causales entronizadas por el legislador...*”

5. Descendiendo al caso en concreto, se tiene que la mandataria judicial de la demandada – MARÍA ESPERANZA BEDOYA MURILLO, alega la falta de competencia en razón del factor cuantía, y la indebida notificación del auto admisorio de la demanda a la referida parte, al considerar que en el presente asunto, debió ser remitido al Tribunal Administrativo de Antioquia en vista de la suma que fue determinada en la estimación que de la cuantía que hizo la parte demandante (\$114.356.672.00); y una indebida notificación, por existir mala fe en la dirección que se indicó para las notificaciones personales de la demandada, puesto que la parte actora tenía pleno conocimiento de la nomenclatura donde podía ser ubicada la particular que integra la parte pasiva de la Litis.

6. En cuanto a la causal de falta de competencia por cuantía, es pertinente destacar, que tal y como lo integra la normatividad citada en precedencia, la nulidad procede es “*cuando el **juez actué en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia***”, es decir, cuando el fallador a través de decisión motivada, se ha percatado de su falta de competencia funcional, territorial o jurisdiccional para conocer el asunto que se sometió a su conocimiento, y ordenó la remisión a la administración judicial que estime competente. Por lo tanto, se hace improcedente la invocación que de esta causal hace la demandada, pues si lo pretendido es precisamente que se declare el juez incompetente, debió solicitarse en la contestación de la demanda, para que fuera resuelta en la audiencia inicial en la etapa de resolución de excepciones previas y no como nulidad, tal y como lo señala el numeral 6º del artículo 180 del CPACA, pudiéndose afirmar que esta causal puede presentarse como una posible excepción previa de “*Falta de jurisdicción o de competencia.*”

Ahora, en aras de darle claridad al libelista sobre el criterio que se tuvo en cuenta para la determinación de la competencia por cuantía, tenemos que con la expedición de la Ley 1437 de 2011, para el caso que nos ocupa, la creación del artículo 157 que determina el criterio objetivo que debe examinar el juzgador al momento de estudiar el razonamiento de la cuantía propuesta en el libelo genitor, y así establecer con suma cautela su competencia funcional, y tener la más exhaustiva observancia a los principios legales contenidos en la Carta Política Nacional, que garantiza que toda persona natural o jurídica, sea juzgada en aplicación del debido proceso, se tuvo en cuenta la pretensión mayor según el razonamiento plasmado en el capítulo de "*estimación razonada de la cuantía*" (fl 37), que no supera los \$22.188.608 suma que es inferior a los 50 smlmv que indica la norma.

7. Por otro lado, se estima una indebida notificación del auto admisorio de la demanda a la señora MARIA ESPERANZA BEDOYA MURILLO, toda vez que las citaciones de notificación fueron enviadas a una dirección diferente a la que realmente conocían de la demandante, existiendo mala fe de dicha parte, al querer hacer incurrir en un error al juzgado.

Una vez revisadas las diligencias adelantadas dentro del expediente, así como de las diferentes pruebas aportadas a éste, no logra dilucidar esta judicatura la mala fe alegada por la demandada, puesto que se observa el debido acatamiento de la parte actora a los requerimientos que se realizaron, para que se culminará la notificación personal a la particular accionada, según lo establecía el Código de Procedimiento Civil.

Fue así, que una vez agotadas todas las etapas procesales que comprendían la notificación personal a un particular, y en garantía de los derechos fundamentales de defensa y debido proceso de que es garante la demandada, se procedió a designar un curador ad -litem, que defendiera sus intereses y la representara en la pesquisas que se debían realizar en el medio de control incoado.

Consecuentes con lo anterior, es pertinente indicar que si bien pudo existir un error en la dirección, ello por sí solo no denota una notificación ilegal y mucho menos la mala fe, pues aun así, el estatuto procesal prevé los medios necesarios para garantizar al que debe ser citado, que sus intereses sean debidamente representados, y su defensa se garantice a través del profesional idóneo para ello.

8. Conclúyase en consecuencia, que contrario a lo considerado por la libelista, no le asiste razón cuando afirma que en el asunto que ocupa la atención del despacho, se le ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso y de defensa, al no remitirse a la dirección correcta las

citaciones de notificación, pues el mismo mandatario judicial de la actora al advertir el error en la dirección, manifestó desconocer el domicilio de la señora MARÍA ESPERANZA BEDOYA, dado que esa era la nomenclatura que conocía su poderdante (fl 105), conllevando esta declaración, a que se le nombrara un abogado que la representara en el trámite impartido en el presente medio de control.

9. En el presente caso, como ya se ha advertido anteriormente, la notificación fue realizada en debida forma, así como la designación del curador que representó a la señora MARÍA ESPERANZA BEDOYA (FL 114-115), y en estas condiciones esta agencia judicial **NEGARA el incidente de nulidad propuesto,** toda vez que la causal invocada "*indebida notificación*" no se encontró probada dentro de las diligencias adelantadas en el proceso.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

PRIMERO: RECHAZAR EL INCIDENTE DE NULIDAD presentado por la mandataria judicial de la señora **MARÍA ESPERANZA BEDOYA MURILLO** de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se reconoce personería a la abogada en ejercicio la Dra. **MARTHA LIA PANIAGUA LAVERDE** portadora de la T.P. 190.036 del C.S de la J, para que represente a la parte demandada, la señora MARÍA ESPERANZA BEDOYA MURILLO en el proceso de la referencia, en los términos del poder conferido (folio 181 del cuaderno principal).

Dependencia Judicial. Se reconoce como dependiente judicial, de la apoderada citada en precedencia, al joven **ANDRÉS FELIPE ARANGO PANIAGUA** identificado con C.C. 1.017.244.655 de Medellín, estudiante de Derecho, para que se le permita el acceso al expediente.

Continúese con el trámite del proceso.

NOTIFÍQUESE

**MARÍA ELENA CADAVID RAMÍREZ
JUEZ**

**NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO VEINTICUATRO (24°) ADMINISTRATIVO ORAL
DE MEDELLÍN**

En la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRÓNICOS** el auto anterior.

Medellín, _____ fijado a las 8 a.m.

SECRETARIA